

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 11 de 1873.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por el C. Luis Rivas, contra el Tribunal Supremo del Estado, por violacion de garantías.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

#### C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que ha examinado en todos sus puntos el juicio de amparo intentado por Don Luis Rivas, contra los procedimientos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado á quien niega la competencia para juzgarlo por sus actos oficiales en desempeño de la Prefectura política del Distrito; ha visto cuidadosamente tambien los informes rendidos por el Ministro en funciones de Juez de 1ª instancia, y tratando de no demorar por mas tiempo este asunto que bastante ha retenido en despachar á causa de enfermedades, que son constantes al Juzgado, pasa á manifestar: que encuentra, C. Juez, que la queja de Rivas no es fundada, puesto que como Prefecto del Distrito, su Juez natural es el que previamente determinó la Constitución política del Estado, es decir, el Tribunal de Justicia.

Ahora bien, que al obrar como dice lo

hizo, haya sido por Orden ó con aprobación del que entonces fungía como Gobernador y Comandante militar; segun dice tambien con facultades discrecionales; que el Estado se encontraba en sitio, y las demas razones que expone, serán acaso atendibles en la causa que se le sigue y por vía de defensa; pero repite el que habla, que á su vez es indeclinable la jurisdiccion del Tribunal que quiere desconocer.

Por lo demas C. Juez, y para no alargar este pedimento con inútiles repeticiones, y estando enteramente conforme con las razones y fundamentos legales del informe rendido por el Ministro en funciones de Juez de 1ª instancia que corre de la hoja 19 á la 24, en todo lo que á su oficio fuere conducente, el fiscal concluye pidiendo declare V, que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Don Luis Rivas, contra los actos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que lo juzga por faltas oficiales cometidas por aquel, en desempeño de la Prefectura política de este Distrito y á que el quejoso se refiere.

Mazatlan, 25 de Febrero de 1873.—*L. Gaona.*

### Sentencia del C. Juez de Distrito

Mazatlan, 7 de Abril de 1873.—Visto el juicio de amparo que Don Luis Rivas promueve contra la providencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que manda se le procese por las faltas que se dice cometió en tiempo que desempeñó la Prefectura de este Distrito, y cuya providencia está ejecutando el C. Ministro del mismo Supremo Tribunal, Lic. Cipriano Pina. Visto así mismo que el quejoso funda su ocurno en las fracciones 1ª y 3ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, por lo que pidió tambien la suspension de tal providencia á lo que se accedió previo informe de la autoridad ejecutora y audiencia del C. Fiscal. Vista igualmente la soli-

citud que en 4 de Febrero último hizo el expresado Sr. Rivas, sobre que se declarase que la suspensión decretada debía de comprender el efecto de que el H. Congreso del Estado le restituyese al empleo de oficial 1º de su secretaría, que estaba desempeñando antes de que se le mandara procesar, cuya solicitud fué declarada sin lugar por las razones que aparecen en el auto de 6 del mismo Febrero, constante á fojas 26 frente. Visto por último el informe que sobre lo principal rindió dicho Sr. Ministro; lo pedido por el C. Fiscal; el alegato que en comparecencia hizo el quejoso, con todo lo demás que ver convino.

Considerando; primero: que aunque por el artículo 8º de la ley citada, está mandado que no se admita el recurso de amparo en negocios judiciales, por diversas ejecutorias que ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está resuelto que debe abrirse el juicio y resolverse en él, con arreglo á derecho, siempre que por cualquier providencia judicial se ataquen las garantías que otorga el Pacto federal, en razón de que el artículo 101 del mismo, manda que los tribunales federales conozcan de toda controversia que se suscite por leyes ó actos que violen las garantías individuales, á lo que se opone el citado artículo 8º; y como por el 126 de la misma Constitución se ordena, que se le tenga á este Código como ley Suprema de toda la Unión, á ella debe estarse primero que á ninguna otra ley, que en algo se oponga ó contradiga sus mandatos.

Segundo: que las faltas por que está mandado procesar el quejoso, fueron cometidas en tiempo que por estar declarado en condición de guerra el Estado de Sinaloa, reasumió la autoridad militar que lo mandaba, los poderes de la civil, y en cuya época según el documento de fojas 33 frente, no solo aprobó las faltas porque se juzga á Rivas, sino que también expresamente dijo: que los actos que se consideran como tales faltas, fueron acordados por él, obrando en vir-

TOMO V. PARTE II.

tud de las facultades que le concedía el decreto de 8 de Marzo del año próximo pasado, y por el que se declaró que la autoridad militar que mandaba en Sinaloa, se sugetara á los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la ley de 20 de Enero de 1860, declarándola expresamente vigente para este caso, por cuya razón, debe tenerse por aprobada la conducta que observó el repetido Rivas al ejercer la Prefectura del Distrito, y aun como juzgados los actos que ejerció, á la vez que para su aprobación en ellos la autoridad militar hizo uso de la plenitud de facultades que le concedía el artículo 5º de la citada ley de 1860, entre la que está la de apoderarse de los poderes que juzgue necesarios.

Tercero: que aunque la autoridad ejecutiva del acto que se reclama, dice en su informe de fojas 19 á la 24, que la citada ley de 20 de Enero de 1860, fué declarada anticonstitucional, por decreto de 24 de Mayo de 1871, y por lo mismo no debe tenerse vigente en tiempo que el Sr. Rivas desempeñó la Prefectura, y ni tampoco puede servir de apoyo para que sus actos se tengan como juzgados y aprobados por la autoridad militar, para que en virtud de tal aprobación no se le tenga como responsable de ellos; esta asercion viene por tierra con solo atender á que el mismo Congreso de la Unión por decreto de 1º de Diciembre de 1871 concedió al Ejecutivo de ella, facultades extraordinarias en los ramos de guerra y hacienda, y en virtud de ellas el propio Ejecutivo declaró en 8 de Marzo de 1872 en estado de sitio á Sinaloa, y mandó que la autoridad militar que nombró, se sugetara al desempeñar su encargo, á lo que previenen los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la repetida ley de 1860 declarándola expresamente vigente para el caso en que se encontraba Sinaloa, y por lo mismo, pudo legalmente la autoridad militar reservarse el poder necesario para aprobar y ordenar los actos que en aquel tiempo ejerció dicho Prefecto.

Cuarto: que al tenerse la autoridad militar revestida de dichos poderes, debe tenerse tambien como única competente para juzgar y aprobar los actos que hoy motivan el proceso del Sr. Rivas, y por consiguiente, cualquiera otra autoridad que nuevamente pretenda calificarlos y juzgarlos, obra como incompetente para el caso, y ataca la garantía que dispensa al quejoso el artículo 16 de la Constitución, porque con tal procedimiento, es molestado aquel en su persona, y la autoridad que lo hace, no puede fundar y motivar la causa legal de su procedimiento, y siendo el Supremo Tribunal de Justicia la autoridad que así obra, de hecho viola la garantía que reclama el repetido Sr. Rivas.

Quinto: que supuesto que la autoridad militar en virtud de las facultades que tuvo por la referida ley de 1860, juzgó y aprobó la conducta del quejoso, ya se le tiene á este como juzgado por las faltas que dice cometió en tiempo que fué Prefecto, y por consiguiente, si hoy se le quiere juzgar nuevamente por ellas, como lo manda la providencia contra la que se pide amparo, ya se le juzgaría dos veces por un mismo delito, y con esto sería violada tambien la garantía que concede el artículo 24 de la citada Constitución.

Por estas razones, y de conformidad con el artículo 101 del mismo Código y de la fracción 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo con las siguientes proposiciones: Primera: la Justicia de la Union ampara y protege á Don Luis Rivas, contra la providencia dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por las faltas que califica de delitos oficiales, y están expresadas en los números 1 y 2 de su escrito fecha 11 de Enero último. Segunda: notifíquese este fallo, y sacándose de él las copias correspondientes para su publicacion y para el Semanario Judicial, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, lo decretó y firmó por ante el secreta-

rio.—*Pedro S. Bermúdez.*—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia. Mazatlan, Abril 24 de 1873.  
—*Francisco Medina*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 14 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por el C. Luis Rivas, contra el Tribunal Supremo del Estado por haber procedido á formarle causa reduciéndolo á prision con motivo de las responsabilidades en que habia incurrido en el tiempo en que estuvo de Perfecto político de Mazatlan, y por haber dispuesto que se acumularan al proceso dos impresos que habia publicado y se le ampliara su declaracion preparatoria sobre este punto; con cuyos procedimientos se han violado en sentir del quejoso, las garantías que otorgan los artículos 14, 18, 24 y 101 de la Constitución federal; pues que cuando desempeñó la Prefectura política, estando declarado Sinaloa en estado de sitio, por el decreto de 8 de Marzo de 1872 que puso en vigor los artículos 5º y 6º de la ley de 21 de Enero de 1860, que dispone que inmediatamente que el estado de sitio es declarado, los poderes de que la autoridad civil está investida para la conservacion del orden y de la policía, pasaran enteros á la autoridad militar; y que los tribunales militares se apoderarán del conocimiento de los crímenes contra la seguridad de la República, contra la Constitución y contra el orden y la paz pública; y que habiendo sido aprobados por el Gobierno del Estado, investido del mando militar, los actos por los que se le pretende juzgar, estos, en virtud de esa aprobacion y de las leyes citadas, han quedado bajo la jurisdiccion militar y federal, y no bajo la del Tribunal Supremo, por tenerla suspendida como au-

toridad civil: por lo que al intentar conocer de ellos, ha invadido la esfera de la autoridad federal, infringiendo el artículo 101 citado y el 14, por no ser el Tribunal previamente establecido por las repetidas leyes de 8 de Marzo de 72, y 21 de Enero de 60. Haciendo consistir la violación de los artículos 18 y 24, en haber sido reducido á prision por delitos que no merecían pena corporal y que ya estaban juzgados por la autoridad militar con el hecho de haber obtenido su aprobación, y por pretenderse también juzgarle por un delito de imprenta del que había sido absuelto por el correspondiente jurado, y considerando: que las leyes de 8 de Marzo de 72 y 21 de Enero de 60 en que funda Don Luis Rivas la incompetencia del Tribunal Supremo de Sinaloa para procesarle por las faltas de que se le acusa, en nada apoyan su pretension, pues que esas leyes para nada quitan á los tribunales de los Estados, cuando estos han sido declarados en estado de sitio, la facultad de conocer de aquellos delitos que como los de que se ha hecho cargo al quejoso, no son de sedición ó rebeldía contra las instituciones, ni hay alteración del orden y de la paz pública, consistiendo como consisten los puntos de acusación, en haber impuesto á varias mugeres la pena de uno y dos meses de servicio de Hospital; no haber consignado al Juez competente al agente de policía Epitacio Gutiérrez, que dió un balazo á un individuo, y por último, haber removido varios alcaldes de los pueblos foráneos del Distrito de Mazatlán, poniendo otros en su lugar, sin tener facultades para ello.

Que la aprobación posterior por parte del gobierno del Estado, como autoridad federal y militar, de la conducta observada por Don Luis Rivas, acerca de estos hechos, no puede en manera alguna producir el efecto retroactivo de que haya sido justo y legal su modo de obrar, si en un principio fué atentatorio y punible, ni cambiar la naturaleza de los hechos, transformán-

olos por ese único motivo en delitos de la competencia de la jurisdicción ordinaria en actos sujetos á la de la autoridad militar y federal.

Que sería fallar contra toda ley y derecho considerar la referida aprobación del Gobierno del Estado como una sentencia absolutoria, sentencia dada de plano sin ninguna forma de juicio y por una autoridad que no era ni jurado militar ni juez federal; y por consiguiente, admitir como pretende el quejoso que al ser procesado por el Tribunal de Sinaloa, se le intenta juzgar dos veces por el mismo delito.

Que inmediatamente despues que fue reducido á prision Don Luis Rivas, se le puso en libertad bajo de fianza, con total arreglo al artículo 18 de la Constitución de la República.

Que como declara expresamente el auto que ordenó se acumularan á la causa los dos impresos que había publicado el quejoso y se le ampliara su inquisitiva sobre este punto, esto era con el único objeto de que sirvieran de constancias en el proceso, y para mejor esclarecimiento de los hechos, fojas 29, y no para hacerle cargo sobre ellos iniciando un nuevo juicio.

Que por tales motivos, no aparecen violadas ninguna de las garantías constitucionales que se han invocado en este recurso; para solicitar el amparo; y con fundamento del artículo 101 de la Constitución federal, se declara: 1º que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sinaloa en siete de Abril de presente año que concedió el amparo; 2º: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Luis Rivas contra las providencias del Tribunal Supremo de Sinaloa, por las que mandó formarle causa, reducirlo á prision y acumular al proceso los dos impresos que había publicado, ampliándosele su inquisitiva sobre este punto.

Devuélvanso los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auzá.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 23 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Marcelino Yépez, contra el Gefe político de Salamanca, por haberlo juzgado como salteador, y negándose á ponerlo en libertad conforme á la ley de amnistía.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Marcelino Yépez, ha promovido el presente recurso de amparo contra la Gefatura política de Salamanca, quejándose de que en su persona se han violado las garantías individuales consignadas en los artículos 13, 16, 18 y 20 de la Constitución federal.

La violación de los artículos citados se hace consistir, en que incorporado contra su voluntad á una fuerza de sublevados contra el Supremo Gobierno, que mandaba como coronel Juan Bermúdez, en la revolución que se inició en San Luis Potosí, logró desertarse; pero días después fué aprehendido y conducido á Salamanca; el Gefe político lo juzgó, según la ley de 9 de Abril de 1870, y lo sentenció á la pena de muerte. La Legislatura del Estado le concedió la gracia

de indulto, por lo que se le conmutó la pena á que había sido condenado, en la de diez años de presidio, que actualmente estingue en la Penitenciaría de Salamanca. Publicada la ley de amnistía, concedida en 27 de Julio del año próximo pasado, ocurrió al Gefe político de dicha Villa, solicitando ser puesto en libertad como comprendido en esta disposición; á esta solicitud, no se accedió por estar el reo á la inmediata disposición del Gobierno del Estado.

En el informe con justificación rendido de conformidad con el artículo 99 de la ley de 20 de Enero de 1869, como justificante, se trascribieron dos comunicaciones: una del Supremo Tribunal del Estado, en la que á Marcelino Yépez, por haber sido indultado de la pena de muerte, se le avisa al C. Gobernador, á cuya disposición queda el reo, que se le ha impuesto la de diez años de presidio; y otra, en la que este último funcionario señalaba para la extinción de la pena, la Penitenciaría de Salamanca, comunicando esta Orden al Gefe político de esa Villa.

El que suscribe no consideró estos datos suficientes para determinar si existía la violación de las garantías individuales que se habían invocado, por que en el informe del Gefe político de Salamanca se pretendía fundar la improcedencia del recurso, en que el reo estaba á disposición del Gobierno, cuando de las comunicaciones trascritas en dicho informe, aparece que el decreto del Tribunal del Estado lo hizo ejecutar el C. Gobernador por el Gefe político de Salamanca, siendo esta última autoridad en consecuencia, la inmediata ejecutora del acto reclamado.

No se rindió ninguna prueba en el término que se concedió con este objeto, por lo que el Promotor fiscal por las razones que ha dicho, y para mejor proveer, pidió que se recabara el testimonio de la causa que se instruyó al quejoso. La ley de 9 de Abril de 1870, que normó los procedimientos de esta causa, suspendió exclusivamente